

RESOLUCIÓN 047 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE HECTOR AMAYA ALBARRACIN, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 5.553.927 Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO 036 DE 2016.”

El Funcionario Ejecutor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Norte de Santander en uso de las facultades legales y estatutarias conferidas por el artículo 5to de la Ley 1066 de 2006; el artículo 98 y siguientes del C.P.A.C.A; el artículo 826 del Estatuto Tributario, la Resolución 5003 del 17 de septiembre de 2020 procedente de la Dirección General del ICBF, y la Resolución 1476 del 2 de octubre de 2017 emanada de la Dirección Regional del ICBF Norte de Santander mediante la cual se designa como Funcionario Ejecutor del ICBF-Regional Norte de Santander a un servidor público y,

CONSIDERANDO:

Que el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta en Oralidad, Norte de Santander, dentro del Proceso de Investigación de Paternidad, con radicado 54-00131-6000-5201-5001-8800, promovido por la señora **MARIA LILIANA MENDOZA BELTRAN**, quien actúa en representación de su hijo, niño **LUIS SANTIAGO MENDOZA BELTRAN**, en contra del señor **HECTOR AMAYA ALBARRACIN**, identificado con cédula de ciudadanía **5.553.927**, profirió sentencia el 0. de marzo de 2016, en la cual se declaró al demandado como padre de la infante en mención, a la vez que se condenó a reembolsar al ICBF los dineros que ésta entidad canceló al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por concepto de la práctica de la prueba de ADN ordenada en dicho proceso, los cuales ascienden a la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$492.660,00)**.

Que atendiendo lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, las entidades públicas del orden nacional encargadas del recaudo de rentas o caudales públicos del nivel nacional tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones a su favor.

Que, *el numeral 2° del artículo 99 del CPACA, indica que:* “Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos: (...) 2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el párrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. (...)”.

Que, el artículo 828 del E. T., precisa lo siguiente: “Prestan mérito ejecutivo: (...) 5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.”

Que entre los folios 1 a 11 del expediente, obran actuaciones remitidas por el Despacho Judicial y diligencias relacionadas con el cobro persuasivo.

Que mediante **Auto 089 del 2 de agosto de 2016**, el Funcionario Ejecutor avocó el conocimiento del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo **036 de 2016**, documento visto a folios 12 del expediente, el cual tiene como fundamento la providencia del **03 de marzo del 2016**, proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta en Oralidad, Norte de Santander, dentro del Proceso de Investigación de Paternidad, con radicado 54-00131-6000-5201-5001-8800, promovido por la señora **MARIA LILIANA MENDOZA BELTRAN**, en representación de su hijo, el niño **LUIS SANTIAGO MENDOZA BELTRAN**, en contra del señor **HECTOR AMAYA ALBARRACIN**, identificado con cédula de ciudadanía **5.553.927**.

Que a folio **13**, aparece oficio dirigido a la Coordinadora Financiera del ICBF- Regional Norte de Santander, al que se allega copia del **Auto 089 del 2 de agosto de 2016**, a través del cual el Funcionario Ejecutor avocó el conocimiento del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo **036 de 2016**.

Que mediante Resolución **069 del 4 de agosto de 2016**, se libró mandamiento de pago a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Regional Norte Santander, en contra del señor **HECTOR AMAYA ALBARRACIN**, identificado con cédula de ciudadanía **5.553.927**, por valor de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$492.660,00)**, más los intereses moratorios causados diariamente a la tasa del 12% efectiva anual hasta el momento del pago total de la obligación, más los costos que se generen en el proceso. (Folio **14**).

Que a folios 15, al 21, obra citación enviada al demandado, a fin de efectuar la notificación del mandamiento de pago proferido mediante Resolución **069 del 4 de agosto de 2016** y constancia de recibido; según lo certifica la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A.; **oficio allegando copia de la resolución por la cual se libra mandamiento de pago el cual fue devuelto por la causal “CERRADO”, aviso para notificación del acto administrativo mencionado y publicación del mismo en el Diario La Opinión de Cúcuta el 20 de septiembre del 2016.**

Que a folio 22, aparece consulta al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud- FOSYGA, indicándose que el demandado se encuentra afiliado a CAFESALUD, en el régimen Contributivo en condición de beneficiario.

Que entre los folios del 23 al 31 y del 35 al 40, reposan oficios enviados a las Oficinas de Tránsito de Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Ocaña, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja, solicitando información

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

acerca de vehículos de propiedad del demandado y respuestas dadas a los mismos en las que no se reportan vehículos registrados a nombre del mismo.

Que a folios 32 al 34, 41, y del 42 al 49, se encuentra constancia de ejecutoria; Resolución 101 del 25 de octubre de 2016, por la cual se ordena seguir adelante con la ejecución; oficio allegando copia del acto administrativo mencionado y constancia de recibido, certificada por la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A.; Auto 178, del 23 de noviembre del 2016, por el cual se liquida el crédito y gastos del proceso, liquidación del crédito, oficio dando traslado de la liquidación, con devolución por la causal "no existe el numero"; aviso para notificación y publicación del mismo en el Diario La Opinión del 02 de diciembre del 2016.

Que entre los folios 50 hasta el 58, del 59 al 65, y del 68 al 70, reposan oficios enviados a las Oficinas de Tránsito de Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Ocaña, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja, solicitando información acerca de vehículos a nombre del demandado, y respuestas dadas a los mismos en las que no se reportan vehículos registrados a nombre del demandado.

Que a folios 66 y 67, y del 71 al 73, encontramos Auto 006 del 06 e febrero de 2017 por el cual se aprueba integralmente la liquidación; oficio se remite el mismo al demandado y Constancia de devolución por la causal "NO RESIDE".

Que entre los folios 74 al 84, del 86 al 91, reposan oficios enviados a las Oficinas de Tránsito de Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Ocaña, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja, solicitando información acerca de vehículos a nombre del demandado, y respuestas dadas a los mismos en las que no se reportan vehículos registrados a nombre del demandado.

Que entre a folio 85, aparece invitación al deudor para buscar alternativas de pago.

Que en a folio 92, reposa liquidación del crédito.

Que entre los folios del 93 al 113, reposan oficios enviados a las Oficinas de Tránsito de Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Ocaña, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja, y a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Chinácota solicitando información acerca de vehículos, ni bienes a nombre del demandado, y respuestas dadas a los mismos sin que se registre información al respecto.

Que entre los folios 114 al 125, reposan oficios solicitando información del deudor enviados a los bancos de Bogotá, Caja Social, Davivienda, Popular, Agrario, BBVA, Bancolombia y

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

Scotia Bank Colpatria; y respuestas a los mismos, en la que no se aporta información relacionada con cuentas del deudor, a excepción del Banco Agrario que reporta una cuenta de ahorro a su nombre.

Que a folio 126 al 128, aparece liquidación del crédito, solicitud de embargo al Banco Agrario y respuesta acatando la medida manifestando que no se generó título judicial por encontrarse el saldo dentro del límite de inembargabilidad.

Que entre los folios 129 al 165, reposan oficios enviados a los bancos Av. Villas, Pichincha, GNB Sudameris, ITAÚ Corpbanca, Occidente, Falabella, Coomeva, Bogotá, Caja Social, Davivienda, Popular, Agrario, BBVA, Bancolombia, Scotia Bank Colpatria, a las Oficinas de Tránsito de Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja, y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Chinácota, solicitando información acerca de cuentas, bienes y/o vehículos registrados a nombre del demandado y respuestas dadas a los mismos en las que no se registran datos diferentes a los ya conocidos.

Que entre los folios 166 al 203, reposan oficios enviados a las Oficinas de Tránsito de Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Chinácota, y a los bancos Av. Villas, Pichincha, GNB Sudameris, ITAÚ Corpbanca, Occidente, Falabella, Coomeva, Bogotá, Caja Social, Davivienda, Popular, Agrario, BBVA, Bancolombia, Scotia Bank Colpatria, solicitando información acerca de cuentas, bienes y/o vehículos registrados a nombre del demandado y respuestas dadas a los mismos en las que no se registran datos diferentes a los ya conocidos.

Que a folio 204, encontramos **constancia de suspensión de términos** ordenados a través de las Resoluciones 3110 del 1° de abril del 2020 y 3601 del 27 de mayo del 2020 expedidas por la Dirección General del ICBF, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020.

Que a folios 205 al liquidación del crédito y oficio trasladando la misma al demandado, Auto 025 del 05 de noviembre del 2020 por el cual se liquida el crédito y gastos del proceso, oficio remitiendo este al demandado, oficio y Auto 046, por el cual se aprueba integralmente la liquidación.

Que a folios 211 al 213, aparece consulta a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, indicándose que el demandado se encuentra afiliado a La Cooperativa de Salud de Desarrollo Integral, Zona Suroriental de Cartagena COOSALUD ESS, en el régimen Subsidiado en condición de Cabeza de Familia.

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

Que entre los folios 214 al 229, reposan oficios enviados a los bancos Av. Villas, Pichincha, GNB Sudameris, ITAÚ Corpbanca, Occidente, Falabella, Coomeva, Bogotá, Caja Social, Davivienda, Popular, Agrario, BBVA, Bancolombia, Scotia Bank Colpatria, solicitando información acerca de cuentas a nombre del demandado a excepción el de Banco Agrario, entidad que reporta cuenta de ahorros activa a nombre del deudor.

Que en los folios 230 al 233, reposan liquidación del crédito y solicitud de embargo a Banco Agrario y respuesta acatando la medida, e informando que no se generó título judicial porque la cuenta de ahorros se encuentra dentro del monto mínimo inembargable.

Que a folio 234 y 235, aparece certificación expedida por el Contador de la Regional ICBF-Norte de Santander y Registro SIIF- Nación en la que se indica que, a **01 de diciembre de 2021**, el demandado adeuda por concepto de prueba de paternidad la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$492.660,00)**.

PARTE NORMATIVA

Que el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8° de la Ley 791 de 2002, señala que: "La acción ejecutiva prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término".

Que el artículo 817 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002, reglamentó el término de prescripción a cinco (5) años de la acción de cobro de las obligaciones fiscales, a partir del 29 de julio de 2006, con la expedición de la Ley 1066 de 2006, así: 1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

Que la prescripción extintiva de las obligaciones se puede interrumpir civil y naturalmente, tal como lo señala el artículo 2539 del Código Civil, y por aplicación del artículo 818 del Estatuto Tributario y la Ley 1066 del 2006. **La prescripción se interrumpe por los siguientes casos:** a) **Notificación del mandamiento de pago**, b) Suscripción de Acuerdo de Pago, c) Por admisión de la solicitud del proceso de reorganización, reestructuración o liquidación judicial y d) Liquidación forzosa administrativa. **Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.**

Señala el artículo 17 de la Ley 1006 de 2006, "Lo establecido en los artículos 8 y 9 de la presente ley, para la DIAN, se aplicará también a los procesos administrativos de cobro que

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

adelanten otras entidades públicas. Para estos efectos, es competente para decretar la prescripción de oficio el jefe de la respectiva entidad”:

Que el numeral 3° del artículo 11 de la Resolución 5003 del 17 de septiembre de 2020, autorizó a los funcionarios ejecutores para decretar de oficio o a solicitud de parte según corresponda, el saneamiento de cartera, entre otras por la causal de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones que se encuentren en etapa de cobro coactivo.

Que el artículo 817 del Estatuto Tributario y en el artículo 58 de la Resolución 5003 de 2020 señalan que el término de prescripción se configura al cabo de 5 años contados a partir de la fecha de la ejecutoria del respectivo acto o sentencia de la fecha de su exigibilidad, en tratándose de documentos que constituyan títulos ejecutivos provenientes del deudor.

Que la prescripción extintiva de la acción de cobro se configura por el vencimiento del término que tiene el acreedor de iniciar una acción contra el deudor para el cumplimiento de una obligación, dicho de otro modo, esta institución jurídica priva al acreedor del derecho de exigir judicial o administrativamente al deudor el cumplimiento de una obligación.

Es importante señalar y como bien lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C- 895 de 2009, que el término de prescripción de la acción de cobro encuentra su sustento en los principios de seguridad jurídica, orden público y paz social, lo cual implica que no deba mantenerse de manera indefinida una situación que afecta los derechos de los particulares. Lo anterior fue corroborado por la Corte Constitucional en sentencia T-581 de 2011, en los siguientes términos:

“La Prescripción extintiva tiene una estrecha relación con principios constitucionales como el orden público, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica, por ello es protegida de nuestro ordenamiento. En efecto, en los casos en los que el titular de un derecho permanece indefinidamente sin ejercerlo, no solo se encuentra involucrado el interés particular, sino también el interés general en la seguridad jurídica del ordenamiento y estabilidad de las relaciones.”

Igualmente, es del caso señalar lo establecido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 25000232700020060127501 (18429), 02/16/2016):

“Cuando la legislación tributaria se refiere a deudas manifiestamente pérdidas o sin valor, el artículo 79 del Decreto 187 de 1975, las define como aquellas cuyo cobro no es posible hacer efectivo, por insolvencia de los deudores o fiadores, por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial. Así las cosas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, aclaró que dicha disposición no es taxativa respecto de las gestiones que se deben realizar para acreditar la existencia de estas deudas, sino que remite a pautas determinadas por la sana práctica comercial. **Dado el amplio margen de apreciación que otorga la norma, puede acudir, por ejemplo, a los informes de los abogados en los que se aconseje la baja de la obligación por ser inviable su cobro; la demostración de la insolvencia**

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

de los deudores o acreditar la especificidad de las gestiones realizadas para lograr el cobro de las obligaciones, entre otros. De esta manera, la corporación administrativa precisó que, en la solicitud sobre deducción de la cartera perdida o sin valor, por ser imposible su recuperación, *“debe demostrarse no sólo la existencia de la cartera y los requisitos generales antes mencionados, sino, además, la realización de diligencias orientadas a su recuperación y la existencia de razones para considerarla como pérdida”* (C.P. Hugo Fernando Bastidas).

Que, en el presente proceso, se adelantaron múltiples diligencias tendientes a investigar acerca de bienes de propiedad del deudor en las Oficinas de Registro de Instrumentos; Secretarías de Tránsito Municipales y Departamentales y entidades financieras y aunque esa búsqueda arrojó algún resultado positivo, ya que fue factible el embargo de una cuenta de ahorro cuyo titular es el demandado; sin que pudiera recuperarse lo adeudado, por cuanto siempre estuvo dentro del límite de inembargabilidad.

Que, revisado el expediente, se observa que el mandamiento de pago expedido mediante **Resolución 069** del 4 de agosto de 2016, fue notificado al señor **HECTOR AMAYA ALBARRACIN**, identificado con cédula de ciudadanía **5.553.927**, a través de aviso publicado en el Diario La Opinión el **20 de septiembre del 2016**, según consta a folio **21**.

Lo anterior nos indica, que el término de prescripción se interrumpió, empezando a correr nuevamente, a partir del día siguiente a la notificación, es decir; el **21 de septiembre de 2016**; lo que significa que a la fecha han transcurrido más de cinco (5) años desde la interrupción del mismo, entendiéndose por lo tanto, que la obligación a cargo del ejecutado, por valor de la suma **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$492.660,00)**, más los intereses moratorios causados diariamente a la tasa del 12% efectiva anual hasta el momento del pago total de la obligación, más los costos que se generen en el proceso, se encuentra prescrita conforme lo establecen los artículos 817 del Estatuto Tributario y 57 de la Resolución 5003 del 17 de septiembre del 2020.

Es necesario precisar que por otra parte los términos del presente proceso coactivo permanecieron suspendidos por espacio aproximado de dos meses, en atención a lo dispuesto en la Resolución 3110 del 01 de abril de 2020 y 3601 del 27 de mayo del 2020, expedidas por la Dirección General del ICBF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLÁRAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO en el Proceso de Cobro Coactivo **036 del 2016** adelantado en contra del señor **HECTOR AMAYA ALBARRACIN**, identificado con cédula de ciudadanía **5.553.927**, con relación a la **Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma**

obligación contenida en la providencia proferida del 03 de marzo de 2016, por el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta en Oralidad, en la cual se declaró al demandado padre extramatrimonial del niño LUIS SANTIAGO AMAYA MENDOZA, a la vez que se le condenó a reembolsar al ICBF los dineros que ésta entidad canceló al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por concepto de la práctica de la prueba de ADN ordenada en dicho proceso, los cuales ascienden a la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$492.660,00)**, obligación respecto de la cual el ICBF, mediante Resolución **069** del 4 de agosto de 2016, libró mandamiento de pago a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Regional Norte Santander, ordenándole cancelar el valor indicado, más los intereses moratorios causados diariamente a la tasa del 12% efectiva anual hasta el momento del pago total de la obligación, más los costos que se generen en el proceso.

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR TERMINADO el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo 036 de 2016, adelantado en contra de **HECTOR AMAYA ALBARRACIN**, identificado con cédula de ciudadanía **5.553.927**.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la presente decisión al Grupo Financiero del ICBF- Regional Norte de Santander para que proceda con la cancelación del registro contable correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: REALIZAR el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas en el Proceso de Cobro Coactivo 036 de 2016 adelantado en contra del demandado señor **HECTOR AMAYA ALBARRACIN**, identificado con cédula de ciudadanía **5.553.927**.

ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE copia de la presente Resolución a la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: ARCHÍVESE el expediente y háganse las anotaciones respectivas.

Dada en San José de Cúcuta, el 02 de diciembre del 2021

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



ERNESTO GALVIS GONZALEZ.

Funcionario Ejecutor ICBF-Regional Norte de Santander

Elaboró: E.Galvis

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma